EL NOTICIERO

de las ideas

Nº 5 / ENERO- MARZO DE 2001

950 PTAS / 5,71 EUROS

Conversaciones con Jean-François Revel

"Ahora hay pocas ideas que se combinen con pasiones"

Francisco J. Satué

Reflexiones de dos "exiliados" intelectuales

El presente y el futuro del País Vasco

Iñaki Ezkerra y José María Portillo

Democracia y sociedad de la información

Javier Echeverría

El pie descalzo de la Justicia

José Juan Toharia

Poesía

Textos inéditos de Luis Alberto de Cuenca

RICARDO DE ÁNGEL
JOAQUÍN ARAÚJO
ENRIQUE BUSTAMANTE
ENRIQUE CABRERA
ADELA CORTINA
IÑAKI ESTEBAN
PABLO GARCÍA- BERDOY
RAFAEL PAMPILLÓN
ANTONIO PAPELL
FERNANDO RODRIGO
DARÍO VILLANUEVA

ENRIQUE CABRERA

Catedrático de Mecánica de Fluidos.
Universidad Politécnica de Valencia

El Plan Hidrológico Nacional

La Fundación de la Universidad Complutense celebró el pasado Septiembre en El Escorial el curso "La crisis del agua. ¿Un problema de escasez o de gestión?" Coincidiendo en el tiempo se presentó ante el Consejo Nacional del Agua el anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional, PHN, dando así inicio a su largo peregrinar hacia su posible aprobación por las Cortes. Me supongo a la administración, vista su implicación en el referido Curso, sensible al dilema que su título planteaba, una sensibilidad que lamentablemente no ha sido trasladada a un PHN que atiende la escasez e ignora la gestión. El equilibrio oferta/demanda de agua es, en el marco de una sociedad de consumo insaciable, demasiado frágil. Su restitución exige nuevas obras que aporten más recursos externos, o una mejor gestión que frene el consumo. O posiblemente una mezcla de ambos. El PHN toma partido por la primera alternativa. Historia, cultura y rentabilidad política así lo aconsejan.

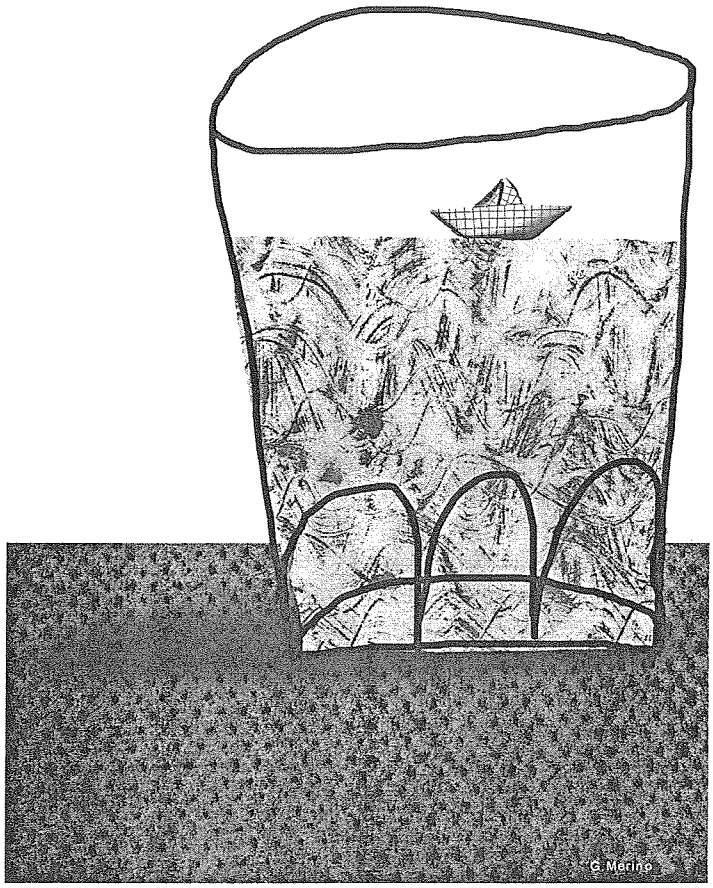
Las obras hidráulicas, presas o trasvases, han sido, son y serán necesarias. Desde siempre ha habido necesidad de guardar el agua sobrante de las épocas de vacas gordas para poder disponer de ella en períodos secos. Desde siempre ha habido necesidad de transportarla desde donde la hay hasta donde escasea. Por ello el manejo del agua ha constituido un permanente reto a la ingeniería, reto extendido a las leyes. Así lo han exigido en áreas agrícolas de recursos limitados los numerosos conflictos derivados de su uso.

Nuestro pasado al respecto es glorioso. La España romana vio uno de los primeros trasvases (Cella, siglo II dC), y hasta nuestros días han llegado maravillosas obras como el acueducto de Segovia y la aún hoy activa presa de Proserpina. Los árabes, cuyos riegos aún perduran, siguieron la tradición romana. En Valencia, Abderramán III estableció el milenario Tribunal de las Aguas, y tanto difundieron el uso de la noria, nombre derivado de Al-naúra o maravilla, que de este modo se la conoce en muchos idiomas. Algunas, como la cordobesa Albolafia, aún perduran. Bombeó agua del Guadalquivir hasta que la reina Isabel de Castilla, de camino hacia Granada, ordenó pararla porque su ruido le impedía conciliar el sueño.

La edad moderna ve establecer las bases de la ingeniería hidráulica, aunque nada, en lo relativo al manejo del agua, sea destacable en una España que sólo tiene ojos para sus colonias. Empero su pérdida, ya cerrándose la época, conforma el pensamiento de unos regeneracionistas de entre los que destaca, si de agua hablamos, Joaquín Costa: "Regad los campos, como hicieron los árabes, si queréis dejar rastro de vuestro paso por el poder", dice en 1880. Una España derrotada, deprimida y aislada necesita comer y necesita el discurso, imprescindible en su tiempo e innecesario hoy, pese a la fuerza con que ha llegado hasta nosotros. Tan es así que ha hecho de España paradigma de una época –los primeros ochenta años de este siglo– calificada por Rouse de "Edad dorada de la hidráulica". Hoy somos el primer país del mundo en grandes presas por habitante. El agua superficial llega de este modo, y sin apenas coste, a los campos, propiciando su despilfarro.

La necesidad de regular ríos de caudal irregular y un imponente avance tecnológico ayudarán al discurso de Costa a materializar el milagro hidráulico español. En efecto, el hormigón posibilita la construcción de grandes presas y largos canales que disparan el uso del agua superficial. Las ingenierías mecánica y eléctrica permiten acceder, bien que a menor escala, a profundas aguas subterráneas de propiedad privada hasta la reforma de la Ley de Aguas de 1985. Éstas, que a diferencia de las superficiales no reciben dinero público, son mejor aprovechadas. Por nuestros abuelos, y por los monumentos que les honran, los nacidos en el Levante sabemos de los poceros, personas que, arriesgando sus vidas, abrieron con pico y pala pozos de más de cien metros de profundidad en busca de agua.

Los regadíos históricos fueron secanos de clima benigno. El agua les llega de ríos a cuya vera también se encuentran tierras más frías, antaño desechadas y hoy, gracias a la tecno-



logía, cultivables. Sus propietarios entienden que, aun con retraso, también tienen derecho al agua que ven discurrir y en condiciones análogas a las que disfrutaron quienes en su uso les precedieron. Todos quieren jugar, pues siendo el agua gratis poco riesgo hay. Al fin y a la postre, el valor de un terreno regable será siempre superior al de secano. Aspectos sociales y medioambientales aparte, urgen criterios claros y racionales que sacien la insaciable sed del campo.

La política actual de suministrar agua a quien la solicita es principio y fin de nuestra gran paradoja. Se la alude como bien preciado y escaso, mas nadie se ocupa de su ahorro. Casi todos los sistemas de riego desconocen cuánta agua consumen, ignorándose también su productividad. Los abastecimientos son tan poco eficientes que deben cortar el agua, como medida de ahorro, en épocas de sequía. Y las redes pierden más agua que la producida por desaladoras subvencionadas por el Estado. Es el triunfo de la brillantez de la obra nueva sobre la discreción del mantenimiento. Y ese es nuestro acervo cultural.

Pero hoy las circunstancias son bien diferentes. España ya no está aislada. Los consumos urbano, industrial y turístico compiten con una agricultura subvencionada y que, por sus inferiores salarios, debe recurrir a la inmigración. Estando en una economía de libre mercado, el Producto Interior Bruto aconseja otros usos. Y este efecto también se traslada, de algún modo, a la agricultura. Las tierras de cuencas excedentarias son, en general, menos competitivas que las ubicadas en áreas de déficit hídrico. O sea, los intereses económicos frente a los sociales. Y sin olvidar la historia, pues aún hoy rigen derechos de agua otorgados, allá por el siglo XIII, por Jaime I. No es nada fácil ordenar este complejo mundo, lo que no justifica mirar hacia otra parte, ya que con el paso del tiempo se acrecientan los problemas.

Nuestra legislación y nuestra administración –no podía ser de otro modo– son fiel reflejo de nuestra historia: activa en la promoción y financiación de obras, e indolente en el control del uso y del gasto. Padecemos periódicas sequías hidrológicas al tiempo que soportamos una permanente sequía de gestión que viene impidiendo equilibrar en el tiempo oferta y demanda. Una administración hídrica que actúa, siguiendo un paralelismo económico, como un Estado que, ante la incesante y creciente presión del gasto público, nada hace por controlarlo: simplemente, aumenta los impuestos. No es, por ello, sostenible en el tiempo.

En este contexto de total continuismo se plantea el PHN 2000. Se ha escenificado un nuevo discurso hídrico, más acorde con los tiempos, pero los hechos demuestran que nada ha cambiado. Por ejemplo, los trasvases se contemplan para garantizar las demandas no atendidas en cuencas deficitarias que, además, utilicen eficientemente su agua, y siempre que hayan sido satisfechas las necesidades internas de las cuencas excedentarias. Discurso fácil y políticamente correcto, pero de muy compleja concreción, porque no hay establecidos indicadores que evalúen la eficiencia, productividad o rentabilidad del agua. O se establecen dichos indicadores, o prevalecerán, como hasta ahora, las valoraciones políticas. Nuestra cultura impide justificar con criterios objetivos el imponente catálogo de obras hidráulicas incluidas en el PHN. Obras que en ningún caso serán inferiores a los cuatro billones de pese-

tas, porque, es bien sabido, su costo final siempre superará, y con amplitud, las previsiones iniciales.

España, pues, tiene un grave problema de gestión en el Estado y graves problemas de escasez de agua en el Sudeste. Contaminado y exhausto el Segura, el trasvase que desde el Tajo le llega resulta insuficiente e incierto. Agotado y presionado por los nuevos regadíos de Castilla La Mancha y por sus trasvases al Turia –y, en breve, al Vinalopó– se encuentra el Júcar. Esquilmados los ríos menores (Mijares, Turia, Vinalopó y otros), sobreexplotados o contaminados los más de los acuíferos, no extraña que el Sudeste (incluida Almería y su campo de Dalías), vea en el Ebro la solución al problema que amenaza sus excelentes perspectivas de crecimiento. Con no más del 15% del agua que se tira al mar, dicen sus políticos, bastaría.

Por contra, Aragón, como se evidenció en la multitudinaria manifestación de mediados de Octubre, ha hecho del Ebro cuestión de Estado y, por ello, no quiere ni oír mentar el trasvase. Sus tierras, que lo ven discurrir, tienen derecho a su agua. Y como el Estado siempre ha asumido las obras necesarias, huelgan criterios de racionalidad o rentabilidad que justifiquen los canales y presas que, contempladas por el Pacto del Agua de Aragón, son necesarias para regar unas tierras de dudosa rentabilidad, como Las Bárdenas o Los Monegros. Hay que regular los afluentes pirenáicos del Ebro y transportar el agua desde un Norte frío a un Sur más apto para el cultivo. "Ya cumplido el Pacto, una deuda pendiente desde hace muchos años, hablaremos del trasvase", dicen los aragoneses.

El argumento de Aragón frente al Sudeste es de ida y vuelta. Los habitantes de los Pirineos, arropados por los activos ecologistas aragoneses, se sienten perjudicados con las obras del Pacto, –pueblos inundados, parajes destruidos, etc.–, pues pierden lo que más valoran. Los aragoneses del Sur, dicen, quieren nuestra agua a costa de un patrimonio sin precio. El consenso no va a ser posible, y en el forcejeo el alto Aragón, con minoría de votantes, lleva las de perder.

El debate en torno al PHN se ha centrado, de manera exclusiva, en el trasvase del Ebro y en el peaje a pagar a Aragón, que, como se ha dicho, consiste en materializar su Pacto. Pobre debate, por cuanto estas obras no alcanzan, ni de lejos, el 50% del total previsto en el presupuesto del PHN. Ninguna voz se ha oído ni a favor ni en contra del resto de unas obras que, subvencionadas por el Estado, completan el exhaustivo catálogo. No presentando el menor conflicto, ninguno de los beneficiarios se opone a que la gestión del agua continúe estando subsidiada. Hay que aprovechar el ocaso de una política que languidece, pues la Directiva Europea, recientemente aprobada, no apunta en tal dirección.

El PHN, pues, tampoco ataca la raíz del problema, la sequía de gestión. Según la ley no es tal su misión, se arguye en su defensa. Por ello sigue con la inercia de la historia. Sólo en lo fácil, en lo económico, parece ambicioso. Poca imaginación y poca valentía para constituirse en referencia de futuro, para marcar un antes y un después tendiendo un puente hacia una política sostenible acorde con los problemas de esta sociedad, no con los de quienes nos precedieron. Ellos resolvieron sus problemas con imaginación y valentía, con la respuesta adecuada al momento. Justo lo que ahora falta. No alcanzamos, pues, el nivel de nuestros ilustres antepasados.

España no administra con rigor el agua. Las necesidades aumentan sin haberse establecido indicadores que digan qué nuevos usos hay que atender. Falta un plan de viabilidad como el que, *mutatis mutandi*, ha racionalizado otros sectores conflictivos. Una inversión de más de cuatro billones no puede seguir, por inercia, la historia. Ninguna empresa se lo podría consentir. Ni tampoco el Estado, excepción hecha del ancestral mundo del agua.

Necesitamos una legislación adecuada a nuestros tiempos y una administración fuerte que, además de promover, también gestione. Que controle el agua subterránea, los vertidos al medio natural receptor y los usos. La actual, con frecuencia, ante graves problemas elude su responsabilidad al amparo de unas competencias dispersas y difusas. El cambio es necesario. Con todo, sería muy triste que lo forzara una crisis en forma de sequía, o incluso la misma necesidad de cumplir con las nuevas directrices de Europa. Tal vez, y como ha sido dicho, lo más relevante sea la aplicación de costes reales al precio del agua. Pocas obras del PHN cumplirían tal requisito. También proclaman una mayor participación ciudadana que reste protagonismo a los principales actores actuales, bien representados por un Consejo Nacional del Agua, juez y parte, en buena medida, de la actual política hídrica.

Pero volviendo al dilema vital planteado por el título del Curso "La crisis del agua. ¿Un problema de escasez o de gestión?", la respuesta al mismo es, a mi parecer, clara: hay problemas de cantidad, pero es mucho mayor el déficit de gestión. Está claro que cambiar un milenario *status quo* comporta un riesgo e impone un más que justificado respeto. Ello explica por qué hasta ahora nadie ha osado hacerle frente. También explica que la crítica a la gestión quede para el Curso. Los experimentos, con gaseosa, y que nadie juegue con el PHN, faltaría más. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así? ¿Hasta cuándo?. ■